

lará en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil, es porque en ningún supuesto sería válido con su simple constancia en el acta de la Junta y sin inscribir, que esta obligatoriedad de inscripción del acuerdo de disolución social se confirma por lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de Registro Mercantil, que exige que en la hoja abierta a cada Sociedad se inscriban obligatoriamente, entre otros actos, la disolución y liquidación de la Sociedad, con lo que se trata de proteger a los acreedores y terceros interesados; que en el artículo 142 del Reglamento de Registro Mercantil se determina que en la escritura de disolución de las Sociedades Anónimas se contenga el nombramiento de liquidadores, lo cual implica el deseo del legislador de que se inscriban ambos actos al mismo tiempo y no el último antes que el primero; que el artículo 155 de la Ley de Sociedades Anónimas establece que el período de liquidación no se abre mientras la Sociedad no se disuelva, lo que exige su inscripción en el Registro Mercantil;

Vistos los artículos 84, 153, 155 y 159 de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 y 4, 86 y 142 del Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956;

Considerando que acordada la disolución de una Sociedad y designado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley, el liquidador correspondiente, la cuestión que plantea este recurso versa sobre si puede tener acceso al Registro Mercantil el nombramiento del mencionado liquidador sin necesidad de que conste inscrito el acuerdo de disolución de la referida Sociedad.

Considerando que normalmente el período de liquidación no se abre, según resulta del artículo 155 de la Ley, hasta que la Sociedad se encuentre en fase de disolución, por lo que resulta evidente que será condición habilitante para la actuación del liquidador designado que la disolución de la Sociedad haya reunido los requisitos establecidos en las disposiciones legales, lo que supone una previa calificación por parte del Registrador Mercantil del acto principal—disolución—con su correspondiente inscripción, para que simultáneamente o con posterioridad pueda examinarse y proceder a inscribir el nombramiento de liquidador;

Considerando que de no hacerse así, y admitirse una inscripción previa del nombramiento de liquidador, a la escritura que contenga el acuerdo de disolución, podría resultar que si esta escritura adoleciera de algún defecto que impidiera su acceso al Registro se produjese el contrasentido de una publicidad registral que por ser inexacta o incompleta pudiera confundir a interesados y terceros, que, confiados en los asientos registrales, presumieran que la disolución de la Sociedad habría ya tenido lugar correctamente y con el cumplimiento de todos los requisitos legales;

Considerando que no se trata de un supuesto de aplicación de los contados casos que en materia de tracto sucesivo recoge el Reglamento del Registro Mercantil, principalmente en su artículo 4, sino que es—como ya se ha indicado—una consecuencia natural derivada del carácter obligatorio de la inscripción en el Registro de la disolución de una Sociedad—artículo 88 del mismo Reglamento—, que exige conste inscrito o se inscriba a la vez esta disolución, para que pueda a su vez inscribirse la de una de las consecuencias de este acuerdo, como es el nombramiento de liquidador.

Esta Dirección General ha acordado confirmar el acuerdo y la nota del Registrador.

Lo que, con devolución del expediente original, comunico a V. S. para su conocimiento, el del recurrente y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 18 de diciembre de 1978—El Director general, José Luis Martínez Gil.

Sr. Registrador Mercantil de Madrid.

MINISTERIO DE DEFENSA

2731

ORDEN de 28 de noviembre de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 4 de octubre de 1978 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Coronel Honorario de Infantería don Narciso Colino González, Caballero Mutilado Permanente.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don Narciso Colino González, quien postuló por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio del Ejército que le denegaron su petición de percibo del complemento de función, se ha dictado sentencia, con fecha 4 de octubre de 1978, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de don Narciso Colino González, Coronel Honorario de Infantería, Caballero Mutilado Permanente, contra denegación presunta, por silencio administrativo, de la reclamación de abono del complemento de función, efectuada con fecha tres de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, a que las presentes actuaciones se contraen, debemos anular y anulamos la referida denegación presunta, y en su lugar, declaramos que el recurrente ostenta derecho a la percepción de dicho complemento retributivo con efectos económicos desde uno de enero de mil novecientos setenta y dos, con las consecuencias legales a ello inherentes; no hacemos expresa imposición de costas.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a vuestras excelencias para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 28 de noviembre de 1978.

GUTIERREZ MELLADO

Excmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y General Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

2732

ORDEN de 11 de diciembre de 1978 por la que se regulan determinadas colaboraciones y competencias entre la Armada y los Ejércitos de Tierra y Aire y Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada, en materia de actividades subacuáticas.

El notable incremento de miembros de los Ejércitos de Tierra y del Aire, Guardia Civil y Policía Armada que en los últimos años han obtenido títulos militares de buceo ha dado lugar a la formación de unidades o agrupaciones militares dedicadas a actividades subacuáticas, cuyo ejercicio requiere una regulación común que garantice la mejor aplicación de la doctrina y técnica de buceo, así como un deslinde claro de competencias.

El Decreto de la Presidencia del Gobierno número 255/1969, de 25 de septiembre, y el Reglamento aprobado por la Orden de la Presidencia del Gobierno de 25 de abril de 1973, establecen las facultades y atribuciones de la Armada en el ejercicio de las actividades subacuáticas que se desarrollen en las zonas marítimas y le confieren un alto grado de intervención en la materia por razones de jurisdicción, seguridad nacional y preparación técnica.

En su virtud, y de conformidad con el Ministerio del Interior, dispongo:

Artículo 1.º Las autoridades de los Ejércitos de Tierra y del Aire, de la Guardia Civil y de la Policía Armada o en cuya dependencia están organizados equipos de especialistas en actividades subacuáticas, con bases en localidades costeras y posibilidad de operar en el mar litoral, están obligadas a ordenar y disponer lo conveniente para el cumplimiento de las normas que se estipulan en la presente Orden.

Art. 2.º Uno.—Cuando se creen los Equipos de especialistas en actividades subacuáticas o sufran variación importante en su constitución, las Autoridades antes citadas remitirán al Capitán General de la Zona Marítima correspondiente, para su posterior remisión por éste al Capitán General de la Zona Marítima del Mediterráneo, un informe que contenga:

- Número de Equipos que tienen organizados y lugar en donde radican.
- Personal que integra los Equipos, con expresión del título de buceo que posean.
- Material de buceo que utilizan e instalaciones hiperbáricas, cámaras de descompresión y elementos especiales de buceo con que cuentan.

Dos.—Asimismo dichas Autoridades o los Jefes de quienes dependen los Equipos de especialistas en actividades subacuáticas podrán solicitar del Centro de Buceo de la Armada (Centro de Buceo de la Armada) los asesoramientos técnicos que precisen, y dicho Organismo, a la vista de la documentación reseñada en el artículo anterior, podrá formular las observaciones y sugerencias que considere oportunas en relación con los aspectos técnicos y de seguridad de las operaciones de buceo.

Art. 3.º El personal que forme parte de los Equipos de especialistas en actividades subacuáticas deberá estar en posesión de alguno de los Títulos militares de buceo expedidos por el Centro de Buceo de la Armada (C. B. A.).

Art. 4.º El Título Militar de buceo estará sujeto a las siguientes vicisitudes:

a) Tendrá que ser revalidado al transcurrir tres años desde la fecha de obtención o de la última revalidación.

b) Se perderá temporalmente:

— Por pérdida de aptitud física, estimada como recuperable en reconocimiento médico.
— Por no efectuar el Curso de Reválida y Actualización.

c) Se producirá la anulación definitiva:

— Por solicitud del interesado.
— Por pérdida de aptitud física, ocasionada por defecto crónico estimado en reconocimiento médico.
— Por no superar el Curso de Reválida y Actualización.
— Por renunciar a efectuar el Curso de Reválida y Actualización.

Art. 5.º El ejercicio de actividades subacuáticas en el mar litoral estará condicionado como sigue:

a) Cuando se trate de operaciones militares o policiales, se solicitará la correspondiente autorización de la Superior Autoridad de la Zona Marítima correspondiente.

Estas misiones se considerarán siempre y en todo caso como de colaboración con la Armada.

b) Cuando se trate de alguna de las que se relacionan a continuación, será suficiente con informar a la Autoridad local de Marina sobre la operación que se va a realizar y, una vez concluida, de sus resultados:

— Auxilio a personas, embarcaciones o aeronaves.
— Protección y vigilancia en deportes náuticos o subacuáticos.
— Cooperación con entidades como Cruz Roja del Mar o Federaciones de Salvamento y Socorrismo, etc.

c) Para el rastreo y localización de cosas hundidas y el reconocimiento de costas, puertos, cascos de buques etc., se solicitará, salvo aquellos casos de extrema urgencia, autorización del Comandante Militar de Marina.

Art. 6.º El hallazgo de objetos sumergidos deberá comunicarse a la Autoridad local de Marina.

Si se sospecha que pueda tratarse de algún artefacto explosivo, no se intentará su recuperación y se comunicará inmediatamente a la Autoridad local de Marina para que solicite el envío de personal especializado en desactivado submarino.

Art. 7.º En todas las operaciones de buceo se tendrán en cuenta las normas de seguridad que establecen el Capítulo X del Reglamento citado en el preámbulo de la presente Orden y las disposiciones que, al respecto, ha dictado o dicte el Estado Mayor de la Armada. Estas últimas podrán solicitarse por conducto reglamentario a dicho Estado Mayor.

Art. 8.º Uno.—El Título militar de buceo no autoriza la práctica del buceo profesional, aunque sí el buceo deportivo con las limitaciones de profundidad que establezca el correspondiente título.

Dos.—En la práctica del buceo deportivo, el personal en posesión de título militar de buceo se atenderá a las disposiciones que establezca la Autoridad local de Marina para cada zona.

Madrid, 11 de diciembre de 1978.

GUTIERREZ MELLADO

2733

ORDEN de 15 de diciembre de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 10 de octubre de 1978 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Avelino Escudero Mendoza.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Avelino Escudero Mendoza, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de fecha 18 de marzo y 31 de mayo de 1977 se ha dictado sentencia con fecha 10 de octubre de 1978, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso interpuesto por el Procurador don José Manuel de Dorremochea Aramburu, en nombre y representación de don Avelino Escudero Mendoza, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y siete y treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y siete, que anulamos como contrarias al ordenamiento jurídico, declarando que el recurrente asiste el derecho a percibir el complemento de destino por responsabilidad en la función con efectos desde uno de diciembre de mil novecientos setenta y tres, condenando a la Administración a que practique la correspondiente liquidación para su abono al recurrente la cantidad que resulte, todo ello sin hacer expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 15 de diciembre de 1978.

GUTIERREZ MELLADO

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

2734

ORDEN de 15 de diciembre de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 3 de octubre de 1978, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Marcelino Benito Martínez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Marcelino Benito Martínez, quien postula por sí mismo y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa que le denegaron clasificación como Caballero Mutilado Absoluto, se ha dictado sentencia con fecha 8 de octubre de 1978, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso promovido por el Procurador don Juan Manuel de Dorremochea Aramburu, en representación de don Marcelino Benito Martínez, contra las resoluciones del Ministerio de Defensa, que le denegaron su clasificación como Caballero Mutilado Absoluto, por ser conforme a derecho; todo ello sin costas.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 15 de diciembre de 1978.

GUTIERREZ MELLADO

Excmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y General Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

2735

ORDEN de 15 de diciembre de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 5 de octubre de 1978, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Pedro Larrañaga Elorza.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes de una, como demandante, don Pedro Larrañaga Elorza, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado contra resoluciones del Ministerio de Defensa, de fecha 13 de octubre y 9 de mayo de 1977, se ha dictado sentencia con fecha 5 de octubre de 1978, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por don Pedro Larrañaga, contra la resolución del Ministerio de Defensa, de fecha trece de octubre de mil novecientos setenta y siete, que desestimó el recurso de reposición formulado contra la anterior resolución del mismo Organismo, de fecha nueve de mayo de igual año, que denegó al recurrente el derecho al complemento del destino por responsabilidad en la función, cuyos actos administrativos expresamente anulamos y dejamos sin efecto, por no ser ajustados a derecho, y, en su lugar, declaramos el derecho del recurrente a percibir el complemento solicitado, con efectos económicos desde el uno de diciembre de mil novecientos setenta y tres; sin hacer imposición en costas.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-